



LA NIÑA DE NEZA



Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda
Ilustración

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_tiempo2003@hotmail.com
nologo_news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO


Año X
No. 492
Cuarta Semana de Marzo del 2017
Es una publicación semanal editada por:
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132,
Col. Federal, CP 50120,
Toluca, Estado de México.
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermin Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 27 de Marzo del 2017 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.



 @Nuestro_Tiempo

EN PORTADA

Crédito/ César Martínez.

Suscripción

FOLIO

POR UN AÑO: \$520.00 M.N
SEIS MESES: \$260.00 M.N

FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN:

FINAL DE SUSCRIPCIÓN: _____

A NOMBRE DE: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CALLE: _____

COLONIA: _____

MUNICIPIO: _____

CÓDIGO POSTAL: _____

TELÉFONO: _____

SEMENARIO NUESTRO TIEMPO
EULALIA PEÑALOZA 132, COL. FEDERAL, TOLUCA, MÉX.

TEL.: 01722-197•74•23/ 044722•590 67 69

Juan Manuel Hernández / Ventas

R
E
S
S
D
O



LA NIÑA DE NEZA

.....

** La desaparición de niñas en el Estado de México cada día se vuelve en un hecho más común, niñas de las que no se tienen rastro, no se sabe dónde están, y en algunos casos sólo se encuentran sus cuerpos abonados sin vida en lugares desérticos; rasgos pertenecientes al feminicidio infantil como lo categoriza la socióloga y experta en el tema, Julia Monárrez.*

.....



No hay ningún dato que permita identificar a la niña de aproximadamente 5 años de edad cuyo cuerpo, con signos de violencia, fue dejado por desconocidos en un lote baldío en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyot, en donde vecinas lo encontraron el pasado 18 de marzo.

Eso respondió la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México cuando activistas de la organización “Nosotras” se manifestaron frente a esa institución para exigir información sobre el caso, ante la posibilidad de que suceda lo mismo que con la niña hallada en 2015 en la colonia Juárez de la capital, dentro de una maleta, con signos de violencia sexual y que tuvo que ser enterrada sin identificación.

Nada, no saben nada, dijeron a Cimacnoticias las activistas, tras una reunión con funcionarios de la Fiscalía: sigue sin saberse el nombre de la niña, de dónde viene, quiénes son sus familiares, cuáles las causas de su muerte. Además, nadie ha reclamado el cuerpo. Señalaron las autoridades que tampoco había cámaras de seguridad en el lugar que pudieran revelar pistas sobre los responsables. Sin embargo, les dijeron a las activistas, las autoridades “están realizando inspecciones en las escuelas de Nezahualcóyotl para saber si la

conocen” y aún están revisando en los registros de personas desaparecidas.

Las activistas fueron recibidas por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, a quien le entregaron un documento dirigido a la Subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia García Espinoza de los Monteros, donde exigen que Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lleve una debida investigación y active los protocolos especializados para atender a las víctimas de feminicidio e identifique la identidad de la niña.

El subsecretario de la Fiscalía se comprometió con las activistas a entregar el documento a la Subprocuradora y reportó que el cuerpo de la niña aún permanece en los Servicios Médicos Forenses, donde puede permanecer hasta 15 días para su investigación y después será enviado a la fosa común.

¿Una más a la fosa común?

Las activistas acusaron que no hay ninguna institución de gobierno, persona u organización que acompañe el caso, que vigile la debida investigación y garantice el acceso a la justicia para la víctima de feminicidio infantil.

Por eso temen que el cuerpo de niña sea enviado a la fosa común, como sucedió con la niña, de entre 18 y 24 meses de edad, dejada dentro de una maleta en la calle Berlín de la capital, en marzo de 2015, y quien fue sepultada el 25 de abril del año pasado, el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, por decisión de las autoridades, “como recordatorio de la persistencia de ese flagelo”, como afirmaron las autoridades capitalinas en esa ocasión.

El posible envío de la “Niña de Neza” -como le llaman las activistas- a una fosa común les preocupó, por lo que acordaron con el subsecretario realizar una sepultura que respete la dignidad de la niña en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Edomex.

Feminicidio infantil

Las activistas temen también que el caso de la niña hallada en Nezahualcóyotl no se investigue bajo el tipo penal de feminicidio infantil, ante la falta de familiares u organizaciones que vigilen el proceso. Y esto, advirtieron a Cimacnoticias, podría derivar, incluso, en la impunidad y libertad de los responsables, que pudieran ser localizados.

Pero el caso de la niña de Neza no es el

único, la desaparición de niñas en el Estado de México cada día se vuelve en un hecho más común, niñas de las que no se tienen rastro, no se sabe dónde están, y en algunos casos sólo se encuentran sus cuerpos abonados sin vida en lugares desérticos; rasgos pertenecientes al feminicidio infantil como lo categoriza la socióloga y experta en el tema, Julia Monárrez.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) de 2006 a 2014 tan sólo en el territorio mexiquense se tiene un registro de 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl.

Otros de los sectores a los que pertenecían son Toluca (5 casos), Tlalnepantla (3 casos); Villa del Carbón contó con 2 casos; Amecameca, Tultitlán, Tianguistenco, Texcoco, Tenancingo, Cuautitlán, Zinacantepec y Lerma, cuentan con un caso; y cuatro se encuentran en calidad de desconocido.

Asimismo la Redim ha insistido en la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas en México; no se activan la Alerta Amber necesarias para la identificación

de las niñas y adolescentes.

Los familiares tienen que esperar 72 horas para iniciar el proceso, aun cuando el Protocolo Alba obliga a los tres niveles de gobierno a buscar mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar la denuncia. Estos factores, ha puntualizado la organización, pone en riesgo la vida de las mujeres.

“No se está dando la atención requerida, no se están implementando los protocolos y medidas necesarias porque siguen ocurriendo situaciones tan preocupantes como está”, concluyó la activista de Nosotras.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 2006 a 2014 en el Estado de México se registraron 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas vivían en el municipio de Nezahualcóyotl.

Antes de solicitar una reunión con la Fiscal, las activistas realizaron un mitin frente a las instalaciones. En todo momento fueron fotografiadas por trabajadores de la dependencia, con el argumento de “tener un registro de

quienes acuden a la Fiscalía”, a pesar de que solicitaron no ser fotografiadas.

El Colectivo de Mujeres entregó un documento dirigido a la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcy García Espinoza de los Monteros, el cual fue recibido por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz.

El día del hallazgo de la niña en el lote baldío de la colonia Las Virgencitas, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar, junto con activistas, levantaron un altar en su memoria e hicieron un homenaje unidas por las manos. También acudieron ante las autoridades del municipio, para exigir la acción de la justicia y que el feminicidio infantil no quede impune.

De acuerdo con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en su Artículo 21 menciona como Violencia Feminicida “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.



Crédito/ César Martínez.

UNA REPENTINA PROSPERIDAD

** Ahiezer tenía claro que entregarse a los federales era un último camino que sólo le alcanzaría para comprar unos días de vida. Conocía la peligrosidad de los agentes de la policía ministerial al servicio de los capos, temía a los funcionarios michiquenses que involucraría en sus declaraciones, conocía el alcance de los federales adscritos al Estado de México que controlaban el negocio y, además, ya tenía un acercamiento a los métodos de La Familia Michoacana para eliminar a la competencia, más si había comprado la plaza y estaba en proceso de expulsar a Los Zetas.*

Francisco Cruz Jiménez

Establecidos los primeros contactos, Ahiezer y los secuestradores hablaron al menos en veinticuatro ocasiones y aquél intentó involucrar a su padre, Rubén Noé Sánchez Flores, en las negociaciones. En uno de los oficios de la averiguación previa, la PGR precisa: “mediante la presente diligencia se procede a verificar el contenido de audio de un disco compacto, el cual tiene la leyenda escrita ‘Veinticuatro llamadas extraídas de un teléfono celular marca Sony S5002i’”.

Y parte de las transcripciones dan cuenta de la negociación:

“—Entonces, la situación es que andan sobre varias cabezas, acá también en el estado.
”—Ajá.

”—Hay algunos cambios, Fabián dice que Pepe Manzur, el licenciado, se iba para el Distrito Federal [...] y los presentaron hoy. Ya les marcaron un arraigo, aunque es domiciliario. Él está muy bien, el pedo es que tu hermano, bueno, pues habló también mucho. Y lo puso pero gacho a él y a varios.

”—Ajá... Ajá.

”—La cosa es desafanar la bronca y que se desafane la mayoría.

”—Sí, sí, sí.

”—¿Conociste a Guevara?

”—No, no lo conocí.

”—Son gente que viene de... Si platicaste con él, hay gente que está viniendo. Y hay gente del Ejército.

”—Ajá.

”—Entonces te lo vuelvo a repetir, es de hue-

vos, a tu carnal se le va a liberar.

”—Ajá.

”—Pues mira, ya que si negocias, que si te ponen campana [agentes federales encubiertos], no me interesa detenerte.

”—Qué pasa, canijo. Mira, ya hablé con mis papás. No se pudieron trasladar acá a la Ciudad de México. Yo estoy aquí, sí. Me dijeron que mañana ya se venían. De hecho te marqué. Hace un ratito, pero lo apagaste. Ya platicué con ellos. Y me dijeron que sí, que no hay ningún problema que ya mañana vienen a platicar conmigo. Les manéjé más o menos que voy a tomar una determinación, que pues nada más quiero que aprueben. No, ellos dijeron que sí, que no hay ningún problema, que mañana vienen a ver lo más temprano que puedan para platicar. Y no hay ningún pro-

blema, qué te parece.

”—Bueno...

”—Pues tú dime. ¿Quieres que lo hagamos ya el día de mañana? No sé, en la tarde o el domingo, tú dime, no hay ningún problema. Ya, lo hacemos en corto, pero oye, una preguntota, qué onda, la neta de cabrones, mi hermano ¿está vivo o muerto?”

Por eso también hay elementos para advertir que, al cuarto día, un asesino a sueldo de La Familia Michoacana le hizo una llamada a Ahiezer para darle a conocer la “pena” y el “dolor” que embargaban a la organización criminal de La Familia por el fallecimiento de Mizraím en una casa de seguridad en el municipio de Tejupilco. Finalmente se lo hicieron saber porque Ahiezer era uno de ellos, ciertamente de otro bando, y porque querían sacarle aquellas listas con nombres de los responsables de las narcotiendas y los agentes, federales y estatales, involucrados en la delincuencia organizada.

Ahiezer tomó como un mensaje personal de sentencia de muerte esa “pena” y ese “dolor”, expresados en la voz de Cachorro. Él también sabía que lo buscaban por lo de las listas. Sin conocer esa situación, el padre de Los Mizraínes no sospechaba que

sus hijos andaban en malos pasos y, menos, metidos en el narcotráfico, aunque desconfiaba de su repentina prosperidad.

Cuando en febrero de 2010 platicó con la revista Proceso y el periodista Ricardo Ravelo le preguntó a qué se dedicaban sus hijos, la respuesta fue clara: “El mayor, Noé, era técnico radiólogo del Hospital San Juan, en Toluca, y el otro se dedicaba al comercio, vendía ropa en tianguis. [...] A mi esposa y a mí siempre nos llamó la atención su rápida prosperidad, pero nos decía que trabajaba para un licenciado cuyo nombre no conocimos sino hasta tiempo después.

”—¿Quién era ese licenciado? —preguntó Ravelo.

”—Era José Manzur, el delegado de la PGR en el Estado de México.”

Y en las transcripciones de las llamadas que se hicieron como parte de la averiguación previa, Ahiezer se sabía hombre muerto:

“—Mira, tú sabes, así de cabrones y te lo voy a decir. Tú sabes que yo no puedo levantar un acta.

O sea, tú sabes que yo no puedo ir con la policía. Si ellos ya saben mi corrido, imagínate, yo voy a ir a en-

tregarme solo, pues no soy pendejo. Yo no puedo estar del lado de la policía porque ahí me ensartan, y tú lo sabes bien. Yo no puedo llegar y decirles sabes qué es esto y esto, porque me iniciarían una investigación, y ahí me rompen la madre. Yo soy consciente. Si tú me dices mira, ahí está tu hermano, mira vamos a hacerla así de cabrones, yo te doy doscientos mil pesos más. Tú dame a mi hermano, yo te entrego la maleta y me boto a la verga con él, no necesito estar en el Estado de México, si sé cómo está ahorita el pedo. Ni siquiera puedo acercarme ahí. Ahorita toda la judicial quiere que yo me acerque para romperme la madre.”

Ahiezer tenía claro que entregarse a los federales era un último camino que sólo le alcanzaría para comprar unos días de vida.

Conocía la peligrosidad de los agentes de la policía ministerial al servicio de los capos, temía a los funcionarios mexiquenses que involucraría en sus declaraciones, conocía el alcance de los federales adscritos al Estado de México que controlaban el negocio y, además, ya tenía un acercamiento a los métodos de La Familia Michoacana para eliminar a la competencia, más si había comprado la plaza y estaba en proceso de expulsar a Los Zetas.



Crédito: Miguel Alvarado.

Masacres en Chilpancingo e Iguala

** Nadie ni nada preparó a los guerrerense para lo que les esperaba después del general-gobernador. Tampoco habrían adivinado el destino que les deparaba con el ministro-gobernador, un hombre de leyes, “civilizado”. El escenario sería uno: Guerrero. Y el resultado: el aniquilamiento de opositores al régimen, sospechosos de militar en partidos de izquierda, potenciales insurgentes y comunistas o simples inconformes.*

Félix Santana/
Francisco Cruz/
Miguel Alvarado

Caballero fue un político corrupto y un gobernador siniestro. Nadie sabe con certeza a cuántos de sus enemigos ordenó aniquilar —se contaban por decenas—, pero la persecución, la tortura y el hostigamiento se hicieron práctica de gobierno, tolerada por Ruiz Cortines y luego por López Mateos, hasta que no se pudo más o ya no fue posible ocultar la barbarie, que incluyó la desaparición de comunistas y dirigentes sospechosos de simpatizar o militar en la izquierda.

Pero el señor general de brigada no entró a las páginas de la historia negra del país por eso, que ya era muy grave, sino porque el 30 de diciembre de 1960 ordenó un redoble de guerra para reprimir y liquidar en la plaza principal de Chilpancingo, la Alameda, a unas cuadas del Palacio de Gobierno estatal, a estudiantes de educación superior que exigían también la destitución de su amigo Alfonso Ramírez Altamirano, rector del Colegio del Estado, en camino de convertirse en la Universidad de Guerrero; la autonomía de la nueva institución —que finalmente daría paso a la actual Universidad Autónoma

de Guerrero—; reformas o una nueva la Ley Orgánica para la universidad, y aumento a los subsidios y fondos educativos. Y la destitución de algunos militares.

Aquel redoble de tambores fue más funesto de lo que parecía. Caballero mostró, una vez más, como si hubiera hecho falta, su rostro verdadero. Ordenó al Ejército —que ya tenía sitiada la universidad a la que, a su vez, le habían suspendido todos los servicios públicos (agua, luz y teléfono), así como cercadas otras calles del centro de la ciudad— romper la huelga estudiantil, que se prolongaba desde el 21 de octubre, dismantelar el plantón en la Alameda, frente a las instalaciones del colegio, arremeter contra el Comité de Huelga de la Federación de Estudiantes (a la que vigilaban de cerca y calumniaban los militares) y reprimir la marcha estudiantil que avanzaría desde la Alameda, por la avenida Vicente Guerrero, hacia el Palacio de Gobierno.

En esa lucha coincidieron Genaro Vázquez Rojas, Jesús Araujo Hernández, dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), y Lucio Cabañas Barrien-



tos, líder de los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”. Se habían unido aseadores de calzado, maestros, campesinos, ganaderos, burócratas estatales y municipales, colonos, copreros, electricistas, padres de familia, transportistas, cafeticultores, comerciantes, líderes sociales, mecánicos, choferes y múltiples organizaciones sociales. Y a la insurrección popular, extendida por todo el estado, se habían sumado banqueros e industriales, de acuerdo con Mario García Cerros en la obra *La educación superior en el proceso histórico de México*.

Lo que siguió fue un caos. Cuando apenas avanzaba la columna del estudiantado, que tenía el apoyo de organizaciones civiles guerrerenses inconformes por la corrupción, aparecieron varias unidades del Ejército, al mando del general Julio Morales Guerrero, del XXIV Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo.

El despliegue militar formaba parte de un operativo oculto —en coordinación con la siniestra Policía Judicial del Estado y grupos paramilitares—, que arremetió contra los estudiantes huelguistas y la población civil. De un disparo seco, un soldado —aunque hubo quienes atribuyeron el disparo a un judicial estatal a las órdenes directas del gobernador— asesinó a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Intencional o no, esa fue una de las señales de ataque.

Nadie podía estar preparado para lo que sobrevendría después de ese primer disparo. Los soldados de Infantería, los judiciales y los paramilitares, armados también con garrotes, se lanzaron contra una multitud civil “armada”, si así puede llamarse a eso, ape-

nas con unos cuantos palos y piedras para repeler el ataque de metralletas y otras armas de fuego. Fue una lucha muy desigual. Los soldados arrasaron con todo y cargaron contra cualquier blanco en movimiento. Despotricando y amenazando, las unidades militares cruzaron entre esa muchedumbre que se había atrevido a protestar, denunciar la corrupción y los abusos, y exigir la remoción del señor gobernador. En sus oficinas de Palacio de Gobierno estatal, el gobernador se encontraba tranquilo y a salvo, recibiendo noticias sobre el número de estudiantes y otros guerrerenses “rebeldes” enviados a las mazmorras de aquel palacio. Y en el patio se apilaban algunas de las víctimas que habían perdido la vida por disparos de los militares.

Mujeres y hombres, jóvenes y niños caían muertos, heridos o moribundos, mientras sujetos vestidos de paisano, apoyo de los militares o estos mismos, golpeaban a las víctimas más débiles o que podían correr menos rápido. Horrorizados y atrapados, los manifestantes escaparon en todas las direcciones, a cualquier lado y por donde pudieron. De cualquier forma, los soldados habían copado y cerrado todas las posibles vías de salida o caminos. Así que la huida fue inútil.

Los soldados cargaron contra todo y contra todos tratando de acallar a los guerrerenses que acusaban a Caballero de todo. La ACG y los estudiantes tenían la razón y la verdad. En tres años, Caballero había logrado lo que pocos gobernantes: echó tanto fuego a la caldera que terminó por quemarse y propiciar una insurrección generalizada en todo el estado. Lo responsabilizaban de asesinatos, desapariciones, secuestro, tortura, saqueo a las arcas y

peculado; en una palabra, de corrupción. El general y su familia sólo se hacían “justicia” y se servían de la Revolución.

Aquel 30 de diciembre de 1960, allí en la Alameda de Chilpancingo se confundían los disparos de los soldados con los gritos de los manifestantes desarmados; aunque en los siguientes días periodistas y “testigos” al servicio de Caballero advertirían que esos inconformes —alumnos del viejo Colegio del Estado y aquellos agrupados en la ACG— provocaron el ataque y la carnicería porque estaban armados con cuchillos.

En la medida en que se fue aclarando esa carnicería y aumentaba el número de estudiantes y otros manifestantes enviados a las mazmorras del palacio, los soldados y otros grupos civiles que comandaron el ataque se retiraron para dar paso a la tropa que se haría cargo de resguardar el orden de la ciudad y de la “limpieza” de la zona de ataque, así como de rendir el parte de guerra al general-gobernador Caballero.

Durante los días siguientes, los guerrerenses se dedicaron a velar y enterrar a sus muertos, buscar a sus desaparecidos y cuidar a sus heridos mientras el Ejército se apoderaba del municipio y el gobernador hacía esfuerzos por mantenerse en el poder. El tamaño de la masacre no se pudo tapar, aunque mucho lo intentaron los operadores del gobernador; entre tanto, el gobierno de López Mateos enviaba a Chilpancingo los Batallones de Infantería 50º y 6º.

Aún hoy nadie sabe cuántos alumnos desaparecieron ni cuántos manifestantes murieron víctimas de las armas del Ejército. El gobierno puso su número en 15 y reconoció decenas de heridos, pero el conteo de los estudiantes y las organizaciones civiles descubrió al menos una veintena de cadáveres —entre ellos cuatro mujeres, por los que se levanta hoy el Monumento a los Caídos en la Alameda—. En los días posteriores se sabría que habían dejado de contar cuerpos apilados en el patio central del Palacio de Gobierno, mientras las mazmorras estaban llenas de estudiantes torturados.

Después de aquel 30 de diciembre de 1960 Guerrero se convertiría inexorablemente en un camposanto de fosas clandestinas, un estado que sentiría la mano pesada o la represión bárbara a

través de todos los cuerpos policíacos y el Ejército.

La campaña posterior para culpar a los estudiantes, a dirigentes de otros organismos civiles y a los comunistas fue inútil y un fracaso gigantesco, aunque el gobierno montó de inmediato una cacería para perseguir, capturar y tratar de encarcelar a los principales líderes del movimiento anticaballerista. Si bien el movimiento estudiantil se apagó, la de por sí devaluada imagen del gobernador, el general Caballero de apellido, sufrió un golpe político mortal por necesidad.

El 4 de enero de 1961 el Congreso de la Unión lo despojaría del fuero constitucional, declararía la desaparición de poderes y lo destituiría, aunque el gobierno de López Mateos, con todas las pruebas que tenía en su contra no intentó siquiera llevarlo a juicio por los delitos que se le podían probar, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Su destitución fue un borrón y cuenta nueva. Sin un desarrollo organizativo afinado, los estudiantes y la sociedad civil vieron de lejos cómo López Mateos les imponía, desde el Distrito Federal, a un nuevo gobernador en la persona del ex senador priista y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Martínez Adame, político improvisado que, como su antecesor, recurrió al terror y al autoritarismo para someter a los guerrerenses.

Caballero fue apenas el presagio de la tragedia. Muy mal les iría con el señor de leyes. Apenas juramentado, este puso en marcha una aparente política de reconciliación, liberó a los universitarios encarcelados por el general, concedió la autonomía universitaria y tomó medidas de distensión en algunos municipios, como lo documentaría y escribiría más tarde Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, pero en su administración germinó y floreció la semilla de su antecesor, el general caído, porque el señor ministro-gobernador adoptó una peculiar campaña de violencia selectiva, aceitó la maquinaria del fraude electoral para perpetuar al PRI en la gubernatura, toleró los abusos de la policía, solapó la formación de grupos paramilitares y mantuvo línea abierta con el Ejército para reprimir y aniquilar movimientos sociales.

El nuevo gobernador también criminalizó la protesta social; a punta de bayoneta, con apoyo de la policía o grupos paramilitares, retomó para el priismo el control de una veintena de ayuntamientos considerados rebeldes y fue clave para someter y pulverizar a la sociedad guerrerense. Fueron permanentes las campañas de terror, intimidación y persecución contra los líderes de la ACG. El blanco especial era Genaro Vázquez Rojas. Algunos otros dirigentes fueron “perdonados” e insertados en el gobierno estatal.

Pero el ministro-gobernador no debió esperar tanto para saber de qué madera estaba hecho y cómo se había curtido en las filas priistas porque el 31 de diciembre de 1962 —justos dos años después de la matanza de estudiantes que le costó el puesto al general Caballero— dio la orden para que el Ejército reprimiera en la ciudad histórica de Iguala una serie de marchas y manifestaciones de la ACG —encabezada por el profesor Genaro Vázquez— y otras organizaciones civiles, que culminarían con una parada cívica o un plató permanente para denunciar y protestar contra el descarado fraude electoral maquinado en los comicios del 2 de diciembre por el gobierno federal —a través de Donato Miranda Fonseca, secretario de la presidencia lopezmateísta— y la jerarquía del PRI para imponer a Raymundo Abarca Alarcón como gobernador “constitucional”.

Cuatro décadas después, en La matanza del 30 de diciembre de 1960, el extinto diputado federal y senador guerrerense Cuauhtémoc Sandoval Ramírez recordaría: “Desafortunadamente, el triunfante movimiento popular-estudiantil no encontró mecanismos y cauces para dar la batalla posterior de manera organizada e institucional, ya que no había partidos políticos nacionales o estatales que articularan sus inquietudes y demandas. Por otra parte, a nivel nacional se vivía un reflujo después de la derrota del movimiento ferrocarrilero, y las cárceles de la capital del país se encontraban llenas de líderes políticos y sindicales”.

Uno y otro, Caballero y Martínez Adame, le imprimieron sentido a la violencia brutal e hicieron de la persecución una norma de Estado. Los críticos y los opositores al régimen fueron proscritos. El señor gobernador cargó

en sus hombros el asesinato de siete igualtecos en aquella parada cívica del 31 de diciembre de 1962 y el encarcelamiento del profesor Genaro Vázquez Rojas.

El fuego a discreción, que se registró poco antes de la medianoche, también dejó un saldo de 23 heridos. Y luego se sabría que al menos 300 personas habían sido reclusas en mazmorras de la cárcel local y que no la pasaban bien porque la mayoría eran víctimas de tortura y otros tratos inhumanos. Ya después el gobernador provisional Martínez Adame decretaría la suspensión de garantías individuales y el toque de queda. Y en esa época empezó la persecución contra el profesor Genaro Vázquez.

Alberto Guillermo López Limón publicó en ¡Comandante Genaro Vázquez Rojas: Presente!: “A fines de 1960 los guerrerenses tumbaron a un gobernador despótico mediante una algarada social; dos años después votaron civilizadamente por la democracia y consiguieron un baño de sangre.

Conclusión obligada: en México la lucha comicial es contraproducente”. La oposición estaba preparada para defender su triunfo en los comicios locales y para frenar los abusos históricos del PRI, pero no contaba con la irrupción del Ejército, apoyado por la policía y paramilitares enviados desde la gubernatura para sofocar a los inconformes, a quienes identificaban como parte de un gran movimiento campesino-comunista.

Nadie ni nada preparó a los guerrerenses para lo que les esperaba después del general-gobernador. Tampoco habrían adivinado el destino que les deparaba con el ministro-gobernador, un hombre de leyes, “civilizado”. El escenario sería uno: Guerrero. Y el resultado: el aniquilamiento de opositores al régimen, sospechosos de militar en partidos de izquierda, potenciales insurgentes y comunistas o simples inconformes.

Gobernadores violentos e incapaces pusieron en marcha una campaña de represión brutal, permanente e implacable. Esa violencia de Estado tuvo un resultado previsible: en los siguientes tres años tomó forma la primera gran guerrilla rural guerrerense. **INT**

Las gigantescas fosas de cadáveres

** El gobierno de Peña sigue armándose en forma inaudita. Las fuerzas armadas mexicanas son las segundas más grandes de América Latina, aunque con su alto ritmo de crecimiento no sería una sorpresa que se acercaran pronto a las dimensiones de las brasileñas. ¿Contra quienes están destinadas tantas armas? No precisamente para una guerra contra Trump pues dichas armas son compradas al Pentágono con créditos multimillonarios concedidos por el propio gobierno de Washington.*

Manuel Aguilar Mora/
Werken Rojo/
Rebelión

El 16 de marzo del 2017 las autoridades hicieron oficial el “descubrimiento” de la que llaman la alberca, que constituye la fosa clandestina más grande del país y posiblemente de América Latina, en la que se encontraron más de 250 cadáveres apilados por los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Se sabe que la alberca es tal vez la mayor del lugar, ya bautizado como “el predio de la muerte”, pero ciertamente no la única pues alrededor hay las señales de muchas más. El “descubrimiento” oficial hecho en un lugar llamado Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz en el estado del mismo nombre, se hace después de que desde hace meses el Colectivo Solecito Veracruz integrado por familiares y amigos de los cientos de desaparecidos en el estado lo habían verdaderamente descubierto y exigido la intervención judicial al nuevo gobierno del panista Miguel Ángel Yunes que sucedió al del

governador criminal priista Javier Duarte, hoy prófugo y buscado por la policía.

Rosario de espantos

Yunes, quien tomó posesión a principios de año, basó su campaña electoral en la denuncia de los crímenes y en la promesa de castigo de Javier Duarte, un siniestro personaje responsable de haber sembrado el terror en la población veracruzana como cómplice de los poderosos y violentos cárteles que operan en el estado (Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente) que asesinaron a cientos de personas durante los seis años de su gobierno. Duarte debió renunciar a la gubernatura antes del fin de su periodo. La acumulación de denuncias y evidencias de sus numerosos crímenes y de la escandalosa deuda contraída por su gobierno para su enriquecimiento personal, obligó a la dirección del PRI a expulsarlo del partido,

no sin antes recibir del presidente Peña Nieto, quien lo protegió hasta el último momento, un favor final al permitirle escapar y mantenerse hasta hoy “desaparecido”.

El caso de las gigantescas fosas de cadáveres clandestinas de Veracruz, horroroso como es evidente, es la cúspide de un rosario de espantos en el mismo estado que se integran al horror que desde hace más de diez años se ha convertido en algo casi cotidiano en todo el país. El procurador del nuevo gobierno veracruzano, que fue quien hizo pública la existencia de ese cementerio clandestino, se tardó más de cien días en presentarse en el lugar. Pero como funcionario que también fue de la administración anterior de Duarte, Jorge Winckler declaró sin tapujos y con conocimiento de causa: “En Veracruz hay fosas como ésta por todos lados, en 45 municipios, todas ellas cavadas durante el gobierno de Duarte”.

Aunque el puerto de Veracruz es “el epicentro de las narcofosas”, existen también en otros municipios: Alvarado, Cosamaloapan, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tres Valles, Tierra Blanca, Iztacoquiltán, “en el norte de la entidad y en otros muchos lados”. Reconoció igualmente que las cifras reales de las víctimas se han ocultado y afirmó que hay “2 mil 348 investigaciones abiertas”. (Proceso, 19.03.2017). Y no se crea que en el nuevo gobierno veracruzano se han reducido los asesinatos, de ninguna manera: se han cometido 600 homicidios en sus primeros tres meses.

El horror que desde hace años abrumba con su funesta secuela depresiva, está siendo documentado en ocasiones puntualmente. Por ejemplo, se ha sabido con las investigaciones efectuadas después de la salida de Duarte que los “levantones”, es decir, los secuestros de personas han sido realizados muchas veces por los delincuentes con la complicidad descarada de las policías de todo género. Tampoco son nuevas las formas utilizadas en Veracruz, en todo el país se han encontrado fosas repletas de cadáveres. Son tristemente célebres las de los cadáveres de decenas de inmigrantes centroamericanos en Tamaulipas en 2010.

El gobierno en el banquillo

Pero el cinismo del gobierno mexicana-

no no tiene límites. Esta condición se ha visto con evidencia en los foros internacionales en los que la situación de la gravedad extrema de la crisis de los derechos humanos por la que atraviesa México se discute, se analiza e incluso se hacen recomendaciones para evitarla como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tales ocasiones los representantes del gobierno mexicano hacen alarde de formalismo retórico que muy mal se complementa con la realidad macabra prevaleciente en el país. Realidad que con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre del 2014, sobrepasó las fronteras y horrorizó al mundo entero.

El gobierno de Peña Nieto tuvo que aceptar, ante el clamor de protestas nacional y la denuncia de muchos sectores en el extranjero, la intervención de expertos internacionales que contribuyeran en la aclaración del crimen de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Ciertamente la presencia del Grupo Internacional de Expertos Independientes, vinculado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una positiva influencia para el desmantelamiento de lo que el procurador de la República Murillo Karam había llamado “la verdad histórica” del caso (la incineración en el tiradero de Cocula de los 43 estudiantes), pero una vez que el gobierno de Peña consideró que la presión había bajado no tardó en expulsar “diplomáticamente” a los cinco expertos y archivar sus conclusiones devastadoras para la versión oficial que sostiene sobre el caso de la noche de Iguala.

La llegada de Trump ha significado casi un terremoto para las estructuras del gobierno mexicano, acostumbrado durante décadas a ser un fiel subordinado de Washington. Comenzando por la cumbre misma. Peña Nieto y su hombre más influyente que actúa como su principal diplomático

Luis Videgaray, se han visto como principiantes en su trato con el energúmeno presidente estadounidense y de hecho han mostrado sin remedio que su papel tradicional de cortesanos del gobierno imperialista los incapacitó para tener una pronta y firme respuesta frente a las amenazas de Trump. No obstante, han tratado de sacar a flote su precaria

situación ante las exigencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque tardía y tibiamente Peña y su secretario de Relaciones Exteriores han acudido a la escena internacional a buscar apoyo para su confrontación con Trump. Ciertamente han aceptado hacer declaraciones conjuntas con otros gobiernos sobre Trump siempre sin abandonar la “moderación” diplomática para evitar una colisión frontal, la que evitan a toda costa esperando llegar finalmente a un acuerdo con quien están destinados a cohabitar como subordinados.

Recientemente, a principios de marzo en Ginebra, en la reunión anual del Consejo de los Derechos Humanos (CDH) de la ONU, el punto de la situación de los derechos humanos en México se incluyó en la agenda y personajes mexicanos estuvieron presentes. El gobierno de México envió al subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas y por parte de las organizaciones no gubernamentales enfocadas a la defensa de los derechos humanos en México estuvieron presentes dos delegados: Olga Guzmán Vergara y Michael W. Chamberlin quienes presentaron ante la reunión el informe de la Open Society Justice Initiative, Atrocidades innegables,

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Al Hussein, en su visita al país en 2015, en pleno momento de las repercusiones directas del caso de Ayotzinapa, en forma inaudita para este tipo de visitas, hizo varias recomendaciones al gobierno mexicano, una de las cuales fue que para cortar la espiral de violencia que aqueja al país se estableciera con urgencia un consejo asesor internacional que colaborara con el gobierno para lograr la erradicación de la violencia. Por supuesto, Peña ni de lejos estuvo, ni está dispuesto a aceptar tal recomendación. El representante oficial a la reunión de Ginebra se entrevistó con Hussein y durante su intervención en el pleno se refirió a la política de Trump atentatoria de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en EUA, pero en una clásica postura de doble moral no se refirió al trato que reciben los inmigrantes centroamericanos cuando entran a México en su paso hacia el país norteamericano.

(fragmento)



Impulsa UAEMéx investigación médica para ayudar a la población

* Con una inversión de 15 millones de pesos, la ampliación del Centro de Investigación en Ciencias Médicas será inaugurada próximamente por el gobernador Erubiel Ávila Villegas.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, visitó el Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED), con el objetivo de supervisar el avance de las obras de ampliación de estas instalaciones, que próximamente serán inauguradas por el gobernador Erubiel Ávila Villegas.

Con una inversión de 15 millones de pesos, la ampliación de este espacio universitario consiste en: la construcción de un área de rehabilitación con vestidor, baños, área de hidromasaje, zona de caminadora, bicicletas, colchoneta, área del encargo, cuatro privados para terapia, área de Psicología con tres cubículos para terapia y un cuarto de telecomunicaciones, además de aula digital, área de psicología para adultos y almacén.

De igual manera, visitó los trabajos de remodelación del Laboratorio para Muestras de Sangre, donde se están concluyendo espacios para jefatura, laboratorio integral con área de lavado de material, almacén, área de regaderas de manos, sanitarios privados, vestidor, sala de espera, sanitario para pacientes, dos módulos para toma de muestras –citológicas y de larga estancia- y archivo.

Además se construyó un área especial para Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y el Centro de Esterilización y Equipo; también se habilitaron las áreas de Odontología y Acupuntura y tres consultorios; en la parte exterior, se remodeló escalinata, plaza de acceso, andadores y trincheras para captación de aguas pluviales, todo con equipamiento de punta.

Acompañado de los secretarios de Administración, Javier González Martínez, y Técnico de Rectoría, Jorge Bernáldez García, recorrió las instalaciones y destacó la labor que lleva a cabo el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, al brindar atención a la población mexiquense.

Este espacio universitario impulsa el desarrollo de la investigación académica y científica, a través de investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional, pero también genera acciones de prevención y promoción de la salud, ofreciendo a la comunidad universitaria y la sociedad en general atención integral de primer nivel en el área de la salud, con calidad, calidez y personal altamente calificado.

Más tarde, el rector hizo un recorrido por las instalaciones del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, donde platicó con alumnos que cursan la Especialidad en Cirugía de Perros y Gatos, provenientes de instituciones académicas de los estados como Yucatán, Jalisco y Ciudad de México, así como de Colombia y Uruguay.

En este espacio, reconoció el trabajo que llevan a cabo los especialistas y alumnos de la UAEM para atender la salud de las mascotas de los mexiquenses e invitó a la población mexiquense a acercarse al Hospital y conocer los diferentes servicios que oferta, como atención médica primaria, consulta externa, urgencias, aplicación de vacunas y esterilizaciones, entre otros.

